
Reflexiones Sobre el Golpe de Estado en Chile

Radomiro Tomić

Han pasado casi cuatro años desde la Mesa Redonda que ODEPLAN y el IDS de la Universidad de Sussex organizaron en Santiago, en Marzo de 1972, para debatir sobre las realizaciones y perspectivas de “la vía chilena al socialismo” en un momento clave de su desarrollo: al cumplirse el primer año y medio del gobierno de la Unidad Popular y de Allende.¹

Releo los debates con una mezcla de sobresalto y melancolía. En Marzo de 1972 todavía hubiese habido tiempo de impedir la caída en el abismo. En cambio, exactamente un año y medio más tarde, el 11 de Septiembre de 1973, el “camino chileno” terminaba, trágicamente aureolado por la suprema dignidad—como Presidente de Chile, como socialista y como hombre—de la muerte de Salvador Allende entre las llamas del Palacio de Gobierno incendiado por los rockets de la Fuerza Aérea.

Entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde de ese día, la sublevación sólo relativamente coordinada de la Fuerzas Armadas y la Policía, había logrado pulverizar las estructuras de poder del gobierno, de la UP, de los partidos marxistas y su extensa base sindical y social, desarrolladas por más de 40 años. ¿Cómo explicarse la sorprendente parálisis de 1.630.000 chilenos que habían votado por la UP apenas seis meses antes? ¿La falta de voluntad de luchar del gobierno y de la UP? ¿La carencia de organización adecuada y de planes mínimos para sostenerse siquiera durante algunos días; los mismos que les hubieran permitido contragolpear políticamente en los dos campos en que podían hacerlo: interno e internacional?

Chile es un vasto país que se alarga por más de cuatro mil kilómetros de una muy accidentada geografía. Para dominar Santiago y Valparaíso, con cinco millones de habitantes en la zona central; Antofagasta y Arica, a 1.200 y 1.700 kilómetros al norte; Concepción y Magallanes a 500 y 2.000 kilómetros al sur de la capital, los militares hubiesen estado obligados a concentrar sus armas y recursos bélicos desguarneciendo al 80% o más de las ciudades, aldeas, centros industriales y mineros, puertos y campos del país. En teoría al menos, la resistencia, aún por pocos días, hubiese permitido al gobierno encender, a

lo largo del territorio nacional, centenares de focos de violencia de civiles contra civiles, movilizandolos la variada gama de instintos e ideales, pasiones e intereses, convicciones y apetitos, intenciones y hasta casualidades que alimentan el enrolamiento en las guerras civiles. Paralelamente tal resistencia transitoria habría dado lugar a iniciativas internacionales ante el Consejo de las Naciones Unidas (Cuba alcanzó a intentarlo), y probablemente a otras de “solidaridad bilateral” cuyo solo anuncio hubiera contribuido a inflamar y endurecer la resistencia interna, complicando tal vez agudamente el curso de las acciones bélicas o las formas de su desenlace.

Es probable que Chile se hubiese visto envuelto no solamente en una guerra civil, sino en una guerra civil internacionalizada. España y Corea, ayer; Vietnam, Cambodia y Laos, hoy, demuestran vívidamente que ninguna desgracia mayor que ésta puede abatirse sobre un pueblo. Tal desgarramiento aniquilador le fué ahorrado a Chile gracias a la decisión de Allende de no organizarse para resistir y de no llamar al pueblo a la guerra civil. Fué sin duda mejor y así lo demostrará el futuro no lejano.

Sin embargo, la cuestión subsiste objetivamente: la UP y el gobierno contaban con algunos miles de armas, y para utilizarlas, disponían de algunas decenas de miles de jóvenes, de universitarios, de “brigadistas” y de obreros concientizados como marxistas militantes. No podía derrotar al Ejército en campo abierto ni en una guerra prolongada, pero ciertamente estuvieron en situación de atrincherarse por días —y quizás semanas—en las masa compacta de edificios de concreto armado que rodean la Moneda—y en una docena de gigantescas fábricas modernas—obligando al ejército regular a aceptar la pesadilla del combate urbano, piso por piso y pieza por pieza, en que la granada, la metralleta y el fusil no sólo equiparan a los combatientes, sino que dan a quien se defiende la ventaja del primer tiro.

El general Pinochet declaró a la prensa después del 11 de Septiembre, que ellos calculaban que para dominar Santiago les serían necesarios “cinco días de combate utilizando todo el poder de fuego disponible”.

Otros hombres de armas estimaban que no podrían reducir Concepción—corazón industrial

del sur de Chile: carbón, acero, petroquímica, textiles, cemento, etc.—en menos de ocho días. Pero los gobiernistas ni se atrincheraron en los 200 mil metros cuadrados de edificios de acero y concreto que estaban permanentemente bajo el control del Gobierno—Ministerios, Bancos estatizados, Correos, etc.—que rodean la Moneda con un cinturón indestructible salvo en una operación de largo asedio; ni resistieron en ninguna de las enormes fábricas que se alzan en los cuatro puntos cardinales de Santiago; ni llamaron al pueblo a la acción directa y a la guerra civil. Por el contrario, en las tres oportunidades que Allende tuvo para hablar al país por radio, entre 9 y 11 de la mañana, urgió reiteradamente a los obreros “a permanecer tranquilos en sus lugares de trabajo, y a no dejarse masacrar”. ¡Fue todo!

En la Moneda misma, sólo Allende y 23 miembros del GAP (Grupo de Amigos Personales) defendieron el Palacio. Los demás, Ministros, altos funcionarios, secretarios, médicos, periodistas, no estaban preparados para combatir y no combatieron.

El colapso fue literalmente abrumador. En todo el país, las bajas militares y policiales fueron apenas 44 en total, incluyendo a los caídos en los dos meses siguientes al 11 de Septiembre. No fue destruido un solo tanque ni un solo avión; y sólo un helicóptero fue averiado. A las dos horas de iniciado el golpe, los militares controlaban las 140 radioemisoras que había en Chile. ¡El Gobierno y la UP no tenían ni siquiera una emisora clandestina, y se desintegraban en la más completa incomunicación e impotencia!

Cinco horas después de aparecer el primer tanque frente a la Moneda, Allende y los 23 miembros del GAP estaban muertos, y cualquier semblanza de lucha organizada había desaparecido. De allí en adelante sólo hubo una “cacería masiva de fugitivos y de sospechosos”, allanamientos violentos y en gran escala de fábricas y poblaciones obreras, con decenas de miles de “prisioneros” hacinados en los estadios, cuarteles y prisiones de la capital y de todo el país.

La mayor parte de las cinco mil armas requisadas a la UP que detalla el Libro Blanco de la Junta Militar, fueron encontradas sin usar en los mismos subterráneos y escondrijos en que habían sido originalmente ocultadas. La resistencia armada de algunos centenares de partidarios del gobierno y del MIR, generalmente individuos aislados o pequeños grupos, sólo tuvo el valor de un testimonio de coraje y de sangre, pero de ninguna significación militar.

Los hechos son claros, pero no su explicación. El Gobierno y la UP hubieran podido resistir. No lo hicieron. ¿Por qué . . . ?

Surge una multitud de respuestas, todas ellas válidas en su campo específico, pero ninguna suficientemente comprensiva del fenómeno global:

(1) Porque no tenían unidad en la decisión de combatir. Allende y la mayor parte de la UP estaban convencidos que la resistencia implicaría una masacre colosal de obreros, campesinos y jóvenes. (“No acepto echar sobre mi conciencia la muerte de miles de hombres indefensos”—Debray. *The Observer*, 15 de Septiembre de 1973);

(2) Porque no tenían organización ni planes adecuados para resistir, como se había demostrado ya el 29 de Junio de 1973 al sublevarse el Regimiento Blindado No. 2 que cañoneó por dos horas el Palacio de Gobierno; y se repitió en escala mucho mayor el 11 de Septiembre;

(3) Porque no tenían armas suficientes según se deduce de la información emanada del propio “Libro Blanco” en que se describen cinco mil armas ligeras que representaban lo sustancial de los arsenales ocultos de la UP descubiertos en los primeros dos meses en contraste con los 125 mil soldados, carabineros, marinos y aviadores, entrenados y encuadrados militarmente y con un poder de fuego incomparablemente más devastador: aviones, artillería, tanques, ametralladoras, etc.

(4) Porque no habían podido, o no se habían atrevido a dividir a las Fuerzas Armadas y a Carabineros “desde arriba”, a nivel de los mandos de unidades completas; o a infiltrarlos “desde abajo”, a nivel de sub-oficiales y tropas, salvo en una mínima escala, como ocurrió en la Armada antes del 11 de Septiembre y como quedó en evidencia al desencadenarse el golpe de estado (Carta de protesta del Comité Central del PS a Allende del 4 de Junio de 1973).

(5) Porque la Oposición unida en su lucha contra el Gobierno desde Mayo de 1973 (nueva Directiva en el PDC) había logrado paralizar institucionalmente al Estado: el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General en lucha abierta contra el Poder Ejecutivo; mientras en la base social el país entero era rápidamente conducido al caos con paros, huelgas, marchas, “tomas”, desfiles, algaradas callejeras incesantes, actos de sabotaje mayor al ritmo de un atestado dinamitero por hora, día y noche durante los últimos meses, y

asesinatos que ambos bandos se imputaban recíprocamente.

En los primeros dos años de la administración Allende, la cadena de ilegalidades y alteraciones del orden público fue principalmente responsabilidad de la UP y en gran medida de la ultra-izquierda ajena a la UP. Sin embargo, durante 1973, fueron los grupos opositores al gobierno los que movilizaron a las mujeres, los transportistas, los comerciantes, los colegios profesionales y técnicos, los sindicatos obreros en que tenían influencia, las organizaciones campesinas, los universitarios y estudiantes secundarios, apoyados por una formidable orquestación de prensa, radio y televisión, “para combatir al gobierno marxista e impedir la instauración en Chile de la dictadura del proletariado”. El Partido Nacional había basado su propaganda para las elecciones generales de Marzo de 1973, en el lema: “Hay que sacar a Allende”. Y la prensa de Derecha—y sobre todo de ultra-derecha—incitaba abiertamente a las Fuerzas Armadas al derrocamiento del gobierno. Por otra parte, testimonios que incluyen a las más altas autoridades del gobierno norteamericano han reconocido en meses recientes el grado masivo en que la CIA financió la “desestabilización” del gobierno de Allende e intervino en la política chilena distribuyendo ocho millones de dólares a diarios y partidos de la oposición; incluso tratando de sobornar a miembros del Congreso.

El peso de esta intervención fue decisivo. No solamente porque el torrente de dólares convertidos en el “mercado negro” se transformó en el equivalente de 40 ó 50 millones de dólares en “poder de compra en Chile” para corromper políticos, partidos, sindicatos, diarios, radios y muy probablemente miembros de la Judicatura, Administración Pública y hasta de las Fuerzas Armadas, sino por el colosal “poder de aliento” de saberse protegidos por el poder de los Estados Unidos en sus planes para derribar a Allende y para sucederle. La Oposición no hubiese adquirido sino una fracción de la virulencia y de la extensión que alcanzó sin esta convicción de que contaban “con el apoyo de los Estados Unidos”.

Los que alentaban y financiaban la anarquía sabían lo que hacían. Desde el fondo de los tiempos, cuando los pueblos han tenido que escoger entre la anarquía y la dictadura, han escogido invariablemente la dictadura.

(7) Porque el programa económico del Gobierno había perdido ya toda coherencia: con una inflación oficial del 198% para los primeros ocho meses de 1973, y un reajuste general de salarios

del 200% anunciado para el primero de Octubre; un desabastecimiento generalizado y creciente de toda clase de artículos, incluso los esenciales; descensos dramáticos en la producción agrícola; indisciplina laboral y pérdidas colosales en las industrias estatizadas; agotamiento de la reserva de dólares heredada del Gobierno demócrata-cristiano e imposibilidad de servir la deuda externa; sin nuevas inversiones extranjeras y sin ahorro interno para financiar la instalación de nuevas industrias y la creación de nuevas fuentes de trabajo . . . el Gobierno de la UP hacía agua por los cuatro costados, sin motor, sin velas, sin timón.

La verdad es que no sólo la suerte del Gobierno de Allende sino la de todo el sistema constitucional chileno quedó sellada al fracasar el “diálogo” con la Democracia Cristiana a principios de Agosto, y al renunciar a sus cargos ministeriales y profesionales, los Comandantes en Jefe del Ejército, la Marina, la Aviación y Carabineros, en la segunda mitad del mismo mes. Los fundamentos de la carta-renuncia del general Prats—soldado y chileno ejemplar—no permitían ya hacerse ninguna ilusión: “He sido desautorizado por la mayoría del Cuerpo de Generales” . . . “Mi continuidad en los cargos que ejerzo, dividiría al Ejército . . .”

¡Aquí terminaba el “camino chileno al socialismo” en el erróneo esquema de objetivos y métodos, de estrategia y de tácticas, impuesto por la UP! Allende lo sabía. Su último Ministro del Interior—Carlos Briones—ha declarado que el Presidente había ordenado el 10 de Septiembre, que le redactaran una alocución al país anunciando la convocatoria a un plebiscito en el cual se incluiría también una consulta sobre la eventual renuncia del Presidente de la República a su cargo.

Pero este itinerario que señala varios de los mayores quebrantos de la UP y el gobierno de Allende no despeja el fondo del problema. ¿Era posible en Chile avanzar sustancialmente hacia el socialismo—ino hacia la dictadura del proletariado!—en forma democrática y pacífica—o sea en el llamado “camino chileno al socialismo”—en el período 1970-1976 y después? En términos generales, y ponderando los factores objetivos que caracterizaban la situación político-social-económica de Chile entonces, la respuesta era categóricamente: ¡Sí!

Después de fracasos sucesivos por más de 20 años—desde 1946 en adelante—con gobiernos formados por las más variadas combinaciones de partidos, la desilusión con el sistema tradicional vigente había ganado todos los estratos sociales

del país. Desilusión que iba mucho más allá de determinados partidos o personalidades, para enjuiciar y condenar el sistema entero de valores, instituciones y grupos gobernantes. Tal estado de ánimo se expresaba a todos los niveles de la vida nacional.

Ya desde 1961 en adelante era claramente imposible ganar elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales, sindicales, vecinales o estudiantiles, sobre otra plataforma que la de la "Revolución", aún si los distintos grupos contendores mantenían y agudizaban sus desacuerdos atribuyéndose la calidad de representantes genuinos de la "Revolución" y combatiendo opciones propiciadas por otros.

Tal estado de ánimo se acentuó rápidamente en el quinquenio 1965-1970. Más del 70% de los chilenos votaron, en las elecciones generales de 1969, por partidos, plataformas y candidatos que anunciaban su oposición al capitalismo y a las estructuras tradicionales, y propiciaban formas más o menos avanzadas de socialización. Así ocurría, desde luego, con los partidos marxistas, socialistas y comunistas, que en conjunto obtuvieron cerca de un tercio de la votación: con la Democracia Cristiana, con un 29% y con el ala izquierda del Partido Radical (14% en conjunto). El factor más importante lo constituía, sin duda, la evolución interna que había tenido lugar en la Democracia Cristiana. Programáticamente desde su origen el PDC se había proclamado anti-capitalista, pero simultáneamente reclamando para sí la condición de "alternativa en la lucha contra el marxismo". En la práctica, tal estrategia se traducía en dos efectos paralelos: la división de las fuerzas teóricamente comprometidas en la sustitución del capitalismo en Chile; y el aislamiento de la DC entre los otros dos bloques de fuerza, convirtiendo automáticamente a la Derecha en el "árbitro institucional" de la política chilena.

Desde 1963 en adelante irrumpe firmemente dentro de la Democracia Cristiana una corriente que lucha por la estrategia de la "Unidad del Pueblo" —del acuerdo entre las fuerzas de inspiración marxista, de inspiración laica y de inspiración cristiana— no buscando transacciones ideológicas en un proyecto final de sociedad que hubiesen sido imposibles para todas ellas, sino en un esquema concreto, pero de largo aliento, que permitiera avanzar en común hacia: "La sustitución de las **minorías** por el **pueblo organizado** en el control de los centros de poder político, cultural, económico y social; y la sustitución del **capitalismo** por los **trabajadores organizados**, como centro motor de la economía chilena". (Cita literal de la plataforma presiden-

cial demócrata-cristiana, aprobada por la unanimidad de la Junta Nacional en Agosto de 1969).

Las precisiones del programa presidencial demócrata-cristiano señalaban: "la expropiación de todos los latifundios y la aplicación integral de la Reforma Agraria"; "la nacionalización integral e inmediata de la Gran Minería del Cobre"; "la creación del área de Propiedad Social y del Fondo Nacional para el Desarrollo y la Independencia"; "la reforma bancaria con miras a la nacionalización de todo el sistema bancario y de seguros", etc.

No se trataba meramente de enunciados generales. El Partido Demócrata-Cristiano —y yo como su candidato— estábamos convencidos que el deterioro del régimen tradicional era ya tan grave que ningún nuevo gobierno podría enfrentar con eficacia los problemas fundamentales ni completar su período constitucional, sin un acuerdo expreso y concreto, de gran envergadura, entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Y más específicamente, entre la DC, los partidos marxistas y el ala izquierda del Partido Radical.

La base potencial para la formación de un poderoso movimiento de opinión y de gobierno, con base en todos los sectores, dirigido hacia la transformación de la sociedad chilena en un claro sentido socialista, era un hecho real en Chile en 1970.

Los dos requisitos fundamentales para un "camino chileno al socialismo" eran visibles: 1°. Ser abrumadora **mayoría en la base social** para sostener el programa, no en la arbitrariedad de un grupo gobernante, sino en el consenso mayoritario del país. 2°. Ser mayoría institucional para utilizar la institucionalidad vigente, no con el fin de mantenerla o "modernizarla", sino precisamente de reemplazarla por otra institucionalidad, mediante métodos inobjetablemente democráticos. ¡Pero la UP no lo vio así!

En 1969 Chile era un país con 13 partidos políticos cubriendo todo el arco-iris de opciones ideológicas y de intereses —¡incluyendo apetitos y concupiscencias!— de clases, de grupos y hasta de individuos ambiciosos y de cierta prominencia política.

Ese año, después de trabajosos forcejeos, seis de esos partidos —los dos marxistas y cuatro que no lo eran— formaron la Unidad Popular, sobre todo como una **combinación electoral** que les permitiera ganar la elección presidencial de 1970. Al cabo casi de tres meses de debates enconados y estériles — Octubre a Diciembre de 1969— se resignaron a una pauta básica para la redacción de

un programa común: incluir lo que contara con el asentimiento de los seis partidos y excluir todo lo demás. Suficiente para una plataforma electoral, pero no para articular un gobierno comprometido a transformaciones revolucionarias y todavía con una metodología sin precedentes. La designación del candidato común puso aún más en tensión los intereses encontrados. Después de ásperas deliberaciones en que cada partido trató de imponer a su propio personal, la UP suspendió las negociaciones autorizando a cada pre-candidato para recorrer el país en campaña. Así lo hicieron varios. Como esto conducía rápidamente al suicidio, volvieron a reunirse en Enero de 1970 y esta vez se obtuvo la proclamación de Salvador Allende, quien optaba así, por cuarta vez, a la presidencia de Chile. No se logró sin graves lesiones internas que condujeron, al año siguiente, a la división del Partido Radical y al retiro del gobierno, de la fracción encabezada por el pre-candidato senador Alberto Baltra.

Por su parte, Allende mismo sólo había obtenido 12 votos contra 13 abstenciones en el Comité Central de su propio Partido, el Socialista. Es fácil comprender la precariedad y los compromisos y limitaciones inevitables de una candidatura así generada. De hecho, bajo el "paraguas" de las generalizaciones del programa común, la Unidad Popular gobernó como lo que era: un mosaico de fuerzas e intereses dispares, sin unidad esencial en las difíciles metas del "camino chileno al socialismo", y menos aún, en las exigencias de flexibilidad, perspectiva, generosidad y eficacia en la ejecución correspondientes.

Aunque sería abusivo hablar de una "federación de gobiernos", lo cierto es que la diferente identidad de los **intereses partidistas** aparece desde el comienzo en la constitución del gobierno de Allende y dura hasta su término. Era el llamado "sistema del cuoteo" o parcelación del poder en una especie de "feudalismo partidista". Su efecto paralizador y corrosivo para el espíritu de unidad y la eficacia de la acción conjunta, fue denunciado reiteradamente —especialmente por la Izquierda Cristiana que rehusó su "cuota" de cargos político-administrativos, en 1971— y, en alguna ocasión, por el propio Allende.

El sectarismo consiguiente al "patriotismo del partido" fue otra consecuencia fatal. La discriminación contra los que no eran de la UP adquirió muy rápidamente contornos tan odiosos como contraproducentes. Injurias, pedradas, amenazas, exclusiones abusivas y postergaciones arbitrarias se multiplicaron. Campesinos, obreros, pobladores, modestos funcionarios de la administración pública, semi-fiscal, etc. que no habían apoyado a Allende, fueron marginados de sus derechos

normales y humillados sistemáticamente. En un país como Chile, con un grado apreciable de conciencia cívica, los resultados fueron inevitables: a la sorpresa y resentimiento iniciales, siguió un antagonismo militante contra la UP, más aún en la base social que en las super-estructuras partidarias.

Se podrían acumular centenares de referencias documentadas. Basten dos. Los jóvenes demócrata-cristianos que en la noche del cuatro de Septiembre de 1970 habían intercambiado en la principal avenida de Santiago, banderas y brazaletes con la Juventud Socialista, celebrando la derrota de la Derecha en la persona de Alessandri, empezaron rápidamente a ser víctimas de provocaciones y ataques de parte de las Juventudes de UP que culminaron en el asesinato por la espalda de uno de sus dirigentes —Juan Millalongo— por miembros de la Juventud Socialista.

Los campesinos demócrata-cristianos —la DC controlaba las dos más grandes Federaciones Campesinas: "Libertad" y "Triunfo Campesino"— que habían festejado conjuntamente con los campesinos de la UP, en todo Chile, la derrota de Alessandri como símbolo de que la Reforma Agraria sería continuada y acelerada, fueron notificados a muy poco andar que no serían reconocidos en sus derechos sino en la medida en que aceptaran integrarse a la Federación que controlaba los marxistas, y que era minoritaria: la Ránquil. Ya en Diciembre de 1970, los dirigentes de las Federaciones "Libertad" y "Triunfo Campesino", dirigían a Allende "cartas públicas" expresándole su sorpresa y su protesta, porque el gobierno de la UP se negaba a reconocerles su calidad de representantes del campesinado chileno; y no habían podido tampoco obtener audiencia presidencial.

Podrían multiplicarse este tipo de anécdotas, pero no agregarían nada. Los resultados negativos del "cuoteo" y del sectarismo partidista, fueron los mismos que habían cosechado antes del sectarismo radical, ibañista, y en alguna medida también, demócrata-cristiano, en los períodos en que estos partidos controlaban el poder. Esta vez, más aún que en aquéllas, las ventajas inmediatas de la discriminación resultaron abrumadoramente descontrapesadas por las desventajas que esa actitud provocó en los sectores discriminados y excluidos, los cuales, en definitiva, representaban la mayoría del país.

Pero la UP no era sólo **minoría en la base social**. Lo era también en la **estructura institucional** del país. Desde luego, porque Allende sólo obtuvo el 36% del electorado nacional. En el Congreso Nacional pertenecían a la UP aproximadamente

el 40% de los senadores y diputados. Respecto al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República, ya en la segunda mitad de 1972 era claramente perceptible que se transformaban más y más en “opositores militantes” a la gestión del Gobierno. Y lo mismo ocurría en el vasto complejo administrativo-técnico-profesional del cual formaban parte centenares de miles de chilenos.

Esta doble condición minoritaria: social e institucional, en sistemática confrontación con la mayoría institucional y social de la Oposición, transformaba el “camino chileno al socialismo” en una aventura sin sentido y sin destino. Sellaba la suerte de la UP y la del gobierno Allende.

Estos carecían de los **medios de fuerza** para destruir las instituciones burguesas según el camino clásico o primer camino al socialismo; y se negaron deliberada y reiteradamente a transformarse en **mayoría institucional** para poder utilizarlas y transformarlas desde adentro; lo cual era, sin duda, la esencia del “segundo camino”.

Desde Agosto de 1969 hasta Mayo de 1973, el Partido Demócrata-Cristiano estuvo mayoritariamente en una posición de izquierda, abierta a la colaboración con el gobierno de Allende y la UP en conformidad a la plataforma presidencial DC. El rechazo de la UP fue tan categórico como reiterado. En 1969 y durante todo el curso de la campaña electoral presidencial (“Con la Democracia Cristiana, nada; y con Tomic, ni a Misa”). En Octubre de 1970, a pesar de la decisión de la Junta Nacional DC de elegir a Allende presidente de Chile en el Congreso Nacional, no aceptaron designar a un demócrata-cristiano como candidato conjunto para ocupar la vacante senatorial de Allende. En Diciembre de 1970, incomprensiblemente dejaron sin acogida el ofrecimiento hecho al propio Allende por la nueva directiva demócrata-cristiana presidida por el senador Irureta: “Ayúdenos a ayudarlo; ayúdenos a ser buenos allendistas”. En Abril de 1971, no se interesaron en el ofrecimiento hecho por el Presidente Nacional de la Democracia Cristiana al presidente Allende, para elegir conjuntamente a todos los Alcaldes municipales de Chile. Y en Julio de 1971, no aceptaron la designación de Luis Badilla, presidente de la Juventud Demócrata-Cristiana, como candidato conjunto en la elección complementaria de un diputado por Valparaíso, en que había fallecido un diputado demócrata-cristiano.

La obstinación en forzar a la Democracia Cristiana a la unión con la Derecha, lo cual según calculaban los “estrategas” (?) de la UP les permitiría dividirla, terminó por alterar la

relación interna de fuerzas dentro de la Democracia Cristiana como era inevitable. Los dos tercios partidarios del acuerdo con la UP en la llamada “Unidad del Pueblo” fueron disminuyendo paulatinamente, en la misma medida en que la UP, tanto a nivel de gobierno como de base social, rechazaba tal acuerdo. Con todo, fueron necesarios casi cuatro años para que la corriente de izquierda perdiera el control de la directiva demócrata-cristiana. Recién en Mayo de 1973 ganó la mayoría —53%— la corriente partidaria de “combatir al gobierno y al marxismo con todos los medios necesarios, para impedir el establecimiento en Chile de la dictadura del proletariado”.

A poco andar se hizo visible para todos—gobierno y oposición— que el “punto de no retorno” estaba ya sobrepasado. Pero no todos veían el final del mismo modo. Unos denunciaban como “amenaza inminente” un golpe sangriento “desde abajo” para imponer la dictadura del proletariado. Otros, creíamos que la parálisis del Estado producto de la confrontación virulenta entre los Poderes Públicos, y el desorden económico-social, consecuencia de los antagonismos en la base social, hacían literalmente imposible la continuidad del gobierno de la Unidad Popular, lo cual no implica de por sí que fuera indispensable o inevitable el golpe militar, ya que otras soluciones eran también posibles. Desde mediados de 1973 en adelante, el gobierno perdía aceleradamente el control del orden público, al igual que el control de su propio programa en una espiral de incoherencias y efectos contradictorios.

El colapso del “diálogo” con la Democracia Cristiana al día siguiente de haberse iniciado, a principios de Agosto, y la renuncia de los cuatro Comandantes en Jefe a sus cargos de Ministros y de Comandantes en ese mismo mes, marcaron el fin de la experiencia. Allende lo sabía. También la UP. Como hemos dicho antes, Allende estaba a punto de convocar al país a un plebiscito que sabía que perdería, ahorrándole así a Chile los estragos de una guerra civil o de un golpe de estado sangriento y dictatorial. Por eso no utilizaron los medios de combate a su disposición y no se prepararon para combatir. La tarea esencial sigue pendiente: recoger las lecciones de esta amarga experiencia, corregir los errores cometidos, y emprender otra vez “el camino chileno al socialismo”.